



EL PROYECTO CISMATICO DE ALONSO *

Manuel Prado Rey-Baltar

SUMARIO: INTRODUCCIÓN.—I. ESTUDIO DE LOS ANTECEDENTES SOCIALES, POLÍTICOS Y RELIGIOSOS QUE HICIERON POSIBLE LA PRESENTACIÓN A LAS CORTES DEL PROYECTO DE LEY DE 20.1.1982. 1. *Termina definitivamente la guerra civil con el acontecimiento de Vergara y el Gobierno de Madrid comienza a realizar las gestiones para restablecer las relaciones diplomáticas con Roma.* A) Primeros actos de acercamiento del Gobierno de Madrid a la Santa Sede. B) El restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Roma: ¿cuestión política o cuestión canónica? 2. *La Revolución de 1840 y fin de la Regencia de María Cristina.* 3. *La Regencia de Espartero (1841-1843).* A) Primeros actos del Gobierno de la Regencia contra la Iglesia. B) El Romano Pontífice declara la injusticia e ilegalidad de los actos del Gobierno de Madrid mediante la Alocución de 1 de marzo de 1841.—II. EL PROYECTO DE LEY DE ALONSO. 1. *Autor y fecha de presentación del Proyecto de ley al Congreso de los Diputados.* 2. *Denominación del Proyecto de ley.* 3. *El Proyecto de Ley a través del Congreso de Diputados.* A) Se constituye la comisión encargada de examinarlo. B) Exposición del Obispo de Tuy ante el Congreso de Diputados. C) Comunicación a José Alonso para que se presente al Congreso de Diputados. D) Esperando el dictamen de la comisión. E) Crisis de Gobierno. F) Formación del nuevo Gobierno. 4. *Estructura del Proyecto de ley de Alonso.* 5. *Estudio del Proyecto de ley de Alonso.*—CONCLUSIONES.—FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA.

INTRODUCCIÓN

Estado de la cuestión

Este trabajo de investigación estudia un Proyecto de ley que elaboró y presentó a las Cortes el Ministro de Gracia y Justicia D. José Alonso, el 20 de enero de 1842¹.

Aparece publicado en el apéndice sexto del Diario de las Sesiones de las Cortes como «Proyecto de ley relativo a prohibir toda clase

* Director de la tesis: Prof. Dr. Federico Suárez Verdaguer. Fecha de defensa: 12.V.1982.

1. DIARIO DE LAS SESIONES DE CORTES, CONGRESO DE DIPUTADOS. Legislatura 1841-1842, LX, 336.

de correspondencia con la Curia Romana»² y el mismo autor lo denominaba «Proyecto de ley sobre reservas apostólicas»³.

José Castillo y Ayensa decía que «Este acto era la declaración imprudente de un espantoso cisma»⁴.

Jaime Balmes lo combatió con numerosos escritos. Sobre el contenido del Proyecto, se pronunciaba en los siguientes términos:

«Trata de una gravísima materia. Es la cuestión más grave y trascendental que se haya presentado durante la larga temporada de la revolución española»⁵.

Menéndez Pelayo nos explica que «en el citado proyecto negábase sin ambages el Primado de honor y de jurisdicción al Papa»⁶.

Con motivo de la presentación del Proyecto de ley de Alonso a las Cortes, el Gobierno de Madrid envió al encargado de la Agencia de preces en Roma, Julián Villalba, las directrices políticas que debía seguir en esa Corte. Enterado el Romano Pontífice, Gregorio XVI, de la conducta del gobierno de la Regencia de Espartero, comenzó a preparar una carta Encíclica que se fechó el 22 de febrero de 1842.

Julián Villalba remitió un despacho a Madrid manifestando que al enterarse el Romano Pontífice del contenido del proyecto de Alonso «se halla en la mayor aflicción, e igualmente costernado su gobierno»⁷, y que mientras tanto trabajaban en la elaboración de una Encíclica para dirigirla a los arzobispos, obispos y preladados del orbe católico encomendándoles que recen para que el cielo «preserve del contagio del cisma a una nación reputada desde remoto tiempo por su sana doctrina en la fe y por su firmeza en sostener la unidad de la Iglesia»⁸.

Objetivo del trabajo

El estudio de este proyecto de ley tiene indudable interés, como

2. *Ibidem*, 361.

3. Oficio que envió José Alonso el 16 de abril de 1842 al Congreso de Diputados comunicando que «se presentará a conferenciar con la comisión encargada de examinar el Proyecto de ley sobre reservas apostólicas». ARCHIVO DEL CONGRESO DE DIPUTADOS. Legajo 60, n.º 29.

4. CASTILLO Y AYENSA, José del, *Historia crítica de las negociaciones en Roma desde la muerte del rey don Fernando VII* (Madrid 1859), I, 279.

5. BALMES, Jaime, *Escritos políticos*, en Obras Completas (Barcelona 1927), VI, 173.

6. MENÉNDEZ Y PELAYO, Marcelino, *Historia de los Heterodoxos Españoles* (Madrid 1956), II, 988.

7. Despacho n.º 134 de 18 de febrero de 1842 (reservado). ARCHIVO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. POLÍTICA SANTA SEDE (1835-1842). Legajo 2656, n.º 19.

8. *Ibidem*.

se advierte en algunas afirmaciones de prestigiosos historiadores, juristas, humanistas y diplomáticos.

Nuestro principal objetivo es estudiar el proyecto de ley presentado por el ministro de Gracia y Justicia el 20 de enero de 1842 a las Cortes.

Para ello se ha procurado, lo primero, fijar la atención en los antecedentes que hicieron posible la presentación del proyecto de Alonso a las Cortes. Después del Pacto de Vergara en 1839, termina definitivamente la guerra civil en España y el último gobierno de la Regencia de María Cristina comienza sus conversaciones de acercamiento con la Santa Sede, pues las relaciones estaban rotas desde 1835⁹. Llegó la revolución de 1840 y la Gobernadora renunció a la Regencia el 12 de octubre en Valencia, partiendo en barco hacia Francia. El nuevo gobierno español estaba compuesto por liberales progresistas y presidido por Espartero, siendo designado Regente del Reino el 10 de mayo de 1841.

«Fueron los 3 años de gobierno del Regente lastimosa recrudescencia de furor anticlerical y anacrónico alarde de canonismo regalista»¹⁰.

Seguiremos el camino que recorrió el proyecto de ley en las Cortes desde que fue presentado el 20 de enero de 1842.

Realizaremos un análisis crítico del proyecto de ley, y tanto fue el escándalo que «decíase de público que el Regente, dominado por influencias inglesas, se había propuesto romper absolutamente con Roma y constituir aquí una Iglesia cismática, more anglicano»¹¹.

Fuentes

El método que hemos seguido para la elaboración de este trabajo de investigación en orden a la obtención de datos ha sido el siguiente:

En primer lugar acudimos a los manuales de la historia de España y de la Iglesia Española, pero apenas se detienen en el tema objeto de nuestro estudio, porque tratándose de historias generales no pueden dedicar la atención a una materia tan concreta como la que estudiamos.

Las tres fuentes que nos facilitaron abundantes datos para comenzar la investigación fueron:

9. Sobre la política seguida por el gobierno español frente a la Iglesia desde 1830 a 1840, puede verse CÁRCEL ORTÍ, Vicente, *Política Eclesial de los Gobiernos Liberales Españoles* (1830-1840), Pamplona 1975.

10. MENÉNDEZ Y PELAYO, Marcelino, *ob. cit.*, II, 985.

11. MENÉNDEZ Y PELAYO, *ob. cit.*, II, 989.

1. *La Historia de los heterodoxos españoles*, de Marcelino Menéndez y Pelayo, que dedica una amplia atención a la política heterodoxa durante la Regencia de Espartero.

2. Los escritos políticos y la bibliografía del General Espartero que realiza Jaime Balmes aportando interesantes datos.

3. *La historia crítica de las negociaciones con Roma desde la muerte del Rey don Fernando VII*, de José Castillo y Ayensa.

El siguiente paso consistió en conocer el pensamiento político y la trayectoria que recorrió el proyecto de ley en el Congreso de Diputados a través del Diario de las Sesiones de las Cortes.

Fundamentales han sido las fuentes documentales encontradas en los archivos. Para la realización de nuestro trabajo tres han sido los principales:

1. Archivo de las Cortes ¹².

2. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se encuentra el fondo del antiguo Ministerio de Estado denominado Política Santa Sede y los fondos de la Embajada de España ante la Santa Sede.

3. Archivo del Ministerio de Justicia ¹³.

Nos ha sido de mucha utilidad para conocer los antecedentes históricos de las relaciones Iglesia-Estado en España, la obra de Vicente Cárcel Ortí, *Política Eclesial de los Gobiernos Liberales Españoles*, que comprende desde 1830 a 1840, y otras obras que cito en la bibliografía.

La opinión pública española a través de la prensa siguió muy de cerca la política anticlerical del gobierno de Madrid, y en especial la del Ministro de Gracia y Justicia. Nada más presentar el proyecto de ley a las Cortes, José Alonso fue muy criticado; se analizó el proyecto de ley, y en la mayoría de los periódicos se hizo mucha fuerza para que no saliera adelante. Indudablemente la prensa fue un factor decisivo para que al final de la legislatura del 42 dimitiesen los componentes del Gobierno González y el proyecto de ley de Alonso no prosperase.

El examen de la opinión pública a través de la prensa acerca de

12. En este Archivo hemos encontrado el Legajo 60, n.º 29 que contiene todo lo que hace referencia al camino que siguió el Proyecto de ley de Alonso desde que fue leído el 20 de enero de 1842.

13. Hemos hallado el expediente personal del ministro de Gracia y Justicia D. José Alonso Ruiz Conejares autor del Proyecto de ley facilitándonos datos muy interesantes que expongo en las conclusiones.

las polémicas que surgieron después de la presentación del proyecto de ley al Congreso de los diputados nos ha sido también muy útil para la elaboración de este trabajo.

CAPÍTULO I

ESTUDIO DE LOS ANTECEDENTES SOCIALES POLITICOS Y RELIGIOSOS QUE HICIERON POSIBLE LA PRESENTACION A LAS CORTES DEL PROYECTO DE LEY DE 20 DE ENERO DE 1842

1. *Termina definitivamente la guerra civil con el acontecimiento de Vergara y el gobierno de Madrid comienza a realizar las gestiones para restablecer las relaciones diplomáticas con Roma*

El décimo y último gobierno de la Regencia Cristiana consiguió formarlo Evaristo Pérez de Castro. Tras el pacto de Vergara en 1839, este gobierno intensificó sus gestiones con la Santa Sede, ya que las nuevas victorias de las tropas de la Regencia y la huida de D. Carlos a Francia habían cambiado la situación ¹⁴.

- a) *Primeros actos de acercamiento del Gobierno de Madrid a la Santa Sede*

Las relaciones de España con la Santa Sede estaban rotas desde 1835 y limitadas exclusivamente a una Agencia de Preces desprovista de todo carácter diplomático y dedicada a la correspondencia y despacho de preces ¹⁵.

Al frente de la Agencia de preces en Roma se hallaba José Narciso Aparici. El 12 de diciembre de 1839, recibió una Real Orden procedente del Ministerio de Estado en la que se le comunicaba su remoción de la Agencia, los motivos que la causaron y el nombre del sustituto ¹⁶.

14. Archivo de la Embajada de España cerca de la Santa Sede. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. Legajo 712.

15. Vicente CÁRCCEL ORTÍ ha estudiado las líneas generales de la política seguida por el gobierno español frente a la Iglesia desde 1830 a 1840 en *Política Eclesial de los Gobiernos Liberales españoles (1830-1840)* (Pamplona 1975).

16. Real Orden de 12 de diciembre de 1839, Archivo de la Embajada de España cerca de la Santa Sede. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, Legajo 712.

Queremos hacer constar la importancia que ha tenido en este trabajo de investigación el hallazgo de este valioso documento. En él se manifiesta el sentir del gobierno de Pérez de Castro en los asuntos que hacen referencia a la Santa Sede y se expresan los motivos que causaron la sustitución del encargado de la Agencia en Roma.

Comienza diciendo el documento que «El favorable aspecto que presenta la Causa de Nuestra Legítima Reina S. M. Doña Isabel II, desde que a consecuencia de los portentosos sucesos de Vergara se vio forzado el Pretendiente D. Carlos a refugiarse en Francia, ha hecho nacer la idea en el Gobierno de S. M. de aprovechar tan feliz coyuntura para ver de adelantar algo en nuestros asuntos pendientes con la Santa Sede, sobre todo en el relativo a la expedición de bulas Pontificias a los Obispos tanto tiempo hace presentados por la Augusta reina Regente del Reino»¹⁷.

La suerte de las armas había favorecido a las tropas de Isabel II. Después del Pacto de Vergara la cuestión dinástica en España quedó zanjada. Isabel II, hija de Fernando VII en la Reina legítima. Creían los gobernantes españoles que resuelta la cuestión política, habían desaparecido los obstáculos y las dificultades que impedían el reconocimiento de la Reina por el Romano Pontífice.

Sigue diciendo la Real Orden que cuando esta idea se discutió en el Congreso de Ministros se vio unánimemente la necesidad de que la persona que llevase a cabo las negociaciones con la Santa Sede «uniera a su capacidad, y celo, la importantísima circunstancia de haber sido testigo de todo lo ocurrido en España desde la muerte del Señor Rey D. Fernando VII, pues no es posible de otro modo poseer los datos y argumentos necesarios para rectificar la tan extraviada opinión de ese país, con respecto a nuestros asuntos políticos; considerando además el mismo Consejo de la mayor importancia, el que la referida persona, sobre los datos oficiales, e históricos, que acerca de nuestros asuntos pendientes con el S. Padre se le diesen por escrito, recibiese verbalmente las oportunas instrucciones, con arreglo a las miras del Gobierno de S. M. Tan poderosas consideraciones han movido a la Augusta Reina Gobernadora a decretar la remoción de usted de ese destino»¹⁸.

José Narciso Aparici fue removido de su destino a causa de estas circunstancias políticas por las que atravesaba España. En algunos estudios y trabajos de investigación se afirma que José Narciso Aparici pidió ser relevado de su cargo por motivos de edad, pero creemos que el motivo real que llevó al Gobierno de Madrid a realizar esta sus-

17. *Ibidem*.

18. *Ibidem*.

titución fue sin duda el cambio de rumbo que tomaron los acontecimientos políticos: había que aprovechar el favorable aspecto que presentaba la causa de Isabel II después del Convenio de Vergara «para adelantar algo en nuestros asuntos pendientes con la Santa Sede»¹⁹.

El nuevo encargado de la Agencia en Roma, Julián Villalba, Subsecretario cesante del Ministerio de Estado «no debía suceder simplemente a José Narciso Aparici, sino permanecer en Roma como negociador en las conversaciones que, antes y después, iniciarían los gobiernos español y pontificio para restablecer las antiguas relaciones diplomáticas»²⁰.

b) *El restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Roma: ¿cuestión política o cuestión canónica?*

Las relaciones de España con la Santa Sede estaban rotas desde 1835 «ya que al no reconocimiento de un nuevo nuncio apostólico por parte del Gobierno de Madrid siguió la ruptura total durante más de diez años por decisión expresa del pontificio»²¹ y limitadas exclusivamente a una Agencia de preces desprovista de todo carácter diplomático y dedicada a la correspondencia y despacho de preces.

«Tras la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno de Madrid, la Santa Sede no mantuvo contactos oficiales con el agente Aparici, que residía en Roma, en calidad de ciudadano privado»²².

Los gobiernos que estuvieron en el poder desde 1836 a 1838 tampoco hicieron gestiones para remover los obstáculos que impedían el acercamiento a Roma.

Como hemos visto más arriba, tras la victoria de las tropas de Isabel II y el Convenio de Vergara en 1839 el gobierno de Pérez de Castro «trató de cicatrizar las profundas heridas de la Iglesia hispana en la medida de sus posibilidades y dio los primeros pasos para explorar las disposiciones del gobierno pontificio con respecto a España»²³.

«Y favoreciéndonos la suerte de las armas con el grande acontecimiento de Vergara, se llegó a creer que la terminación definitiva de la guerra civil removía todos los inconvenientes para el reconocimiento de la Reina. En efecto, resuelta de aquel modo la cuestión dinástica, no podía el Santa Padre dudar de que la Reina de España

19. *Ibidem*.

20. CÁRCEL ORTÍ, Vicente, *ob. cit.*, p. 375.

21. *Ibidem*, p. 13.

22. *Ibidem*, p. 365.

23. *Ibidem*, p. 365.

era Doña Isabel II, ni dejar de admitir sus presentaciones por este concepto»²⁴.

Aunque el Papa podía reconocer a Isabel II como Reina de España, no podía reconocerla como Patrona y por tanto capaz de ejercer el derecho de presentación de Obispos.

La cuestión de Roma no era una cuestión política sino una cuestión canónica.

En España los Reyes ejercían un derecho concedido por la Santa Sede: el de presentar los Obispos. ¿Pero cómo iba a reconocer el Papa este derecho a Isabel II, si sus gobiernos habían destrozado la Iglesia Española? Isabel II debía reparar los daños causados por la revolución y así el Romano Pontífice no tendría dificultad alguna para reconocerla como Patrona y confirmar los obispos presentados.

«No se puso el Gobierno al cabo de esta dificultad, porque no había aún comprendido que la cuestión con Roma era desde su origen una simple cuestión de Patronato; no pensó por consiguiente en buscar el único medio que había para restablecer este derecho, que era la reparación conveniente de los daños causados a la Iglesia»²⁵.

Pero esta reparación vino por fin en 1840. Hasta el 16 de julio de 1840 no fue publicada la ley de dotación de culto y clero, en virtud de la cual «las Iglesias de España y el clero secular de las mismas continuarán en la posesión y goce de sus bienes y fincas sin poder enajenarlas, empeñarlas ni hipotecarlas, a no ser con autorización del gobierno»²⁶.

Escribe Castillo y Ayensa que «en las Cortes del año 40 se hizo la ley reparadora de 16 de julio, que mantenía a la Iglesia en la posesión de sus bienes, y restablecía una parte de la renta decimal, con lo que bastaba por entonces para restablecer todas nuestras relaciones con la Corte de Roma, y poner expedito el ejercicio del Patronato»²⁷.

2. La revolución de 1840 y fin de la regencia de María Cristina

«Más ¡oh dolor! en vano trabajaban las Cortes por restaurar con resolución digna de eterno elogio el orden público profundamente alterado: los Gobiernos que venían sucediéndose en el discurso de los dos años anteriores habían consentido la liga fatal entre el par-

24. CASTILLO Y AYENSA, José del, *ob. cit.*, I, 325.

25. CASTILLO Y AYENSA, José del, *op. cit.*, I, 326.

26. CÁRCEL ORTÍ, Vicente, *ob. cit.*, 359.

27. CASTILLO Y AYENSA, José del, *ob. cit.*, I, 326.

tido progresista, y el fascinado jefe de la fuerza armada. Los tristes sucesos de Barcelona y de Valencia, nos colocaron en una situación mucho peor que la que había nacido en La Granja, porque ésta nos dejó al menos la Madre de Isabel II, que moderó los partidos, y templó la violencia en los alternados tránsitos del poder. Cayó de nuevo la revolución sobre nosotros con todas sus demasías, con todos sus furores. ¿Qué sería de la Iglesia española? Grandes amarguras iba a pasar en esta nueva época de trastornos y desolación»²⁸.

El 11 de junio de 1840, la Gobernadora, María Cristina, acompañada de su hija salió de Madrid en dirección a Barcelona. Este viaje fue un hecho histórico en el que se sucedieron acontecimientos de gran trascendencia.

Estando María Cristina en Barcelona estalló la revolución que tuvo como causa la proyectada ley de Ayuntamientos que acababa de ser firmada por el gobierno de Pérez de Castro. A pesar de la oposición de los progresistas y del General Espartero, Duque de la Victoria, la Reina firmó la ley. La Gobernadora salió de Barcelona ejecutando el compromiso ya contraído de formar un gabinete presidido por Espartero. En Valencia la Gobernadora renunció a la Regencia el 12 de octubre de 1840 y se embarcó con destino a Francia.

3. *La regencia de Espartero (1841-1843)*

«El partido progresista volvió al poder no sólo con el propósito que llevó a cabo de deshacer cuanto se hubiese hecho en favor de la Iglesia, sino con el de acrecentar sus males; y lo que es más, con el necio proyecto de poner miedo a Roma para obligarla a capitular con sus locas exigencias»²⁹.

El nuevo gobierno estaba compuesto por liberales progresistas y presidido por el General Espartero, quien fue designado Regente provisional el 10 de mayo de 1841.

Menéndez Pelayo resume con una frase lo que fue la actividad del nuevo Regente mientras estuvo en el poder: «Fueron los tres años de gobierno del Regente lastimosa recrudescencia de furor anticlerical y anacrónico alarde de canonismo regalista»³⁰.

28. *Ibidem*, I, 326 y 327.

29. *Ibidem*, I, 327.

30. MENÉNDEZ Y PELAYO, Marcelino, *ob. cit.*, II, 985.

a) *Primeros hechos del Gobierno de la Regencia contra la Iglesia*

Las juntas revolucionarias cometían toda clase de atentados contra las cosas y personas eclesiásticas. El vicergerente de la nunciatura apostólica, D. José Ramírez de Arellano no pudo mirar con indiferencia los atentados cometidos por las juntas, y cumpliendo su deber envió una comunicación al secretario del Despacho de Estado en el que se lamentaba de que la junta revolucionaria de Madrid hubiese suspendido a D. Manuel Ribote, D. Julián Piñera y D. Félix José Reinoso, jueces del Tribunal de la Rota, a D. Antonio Ramírez de Arellano, de Abreviador interino y al mismo comunicante de la Fiscalía de la Nunciatura.

Les recuerda a los componentes de la Junta que el Tribunal de la Rota existe en estos reinos y en la capital de la monarquía en virtud de una ley canónica; un breve de Clemente X de 26 de marzo de 1771 lo creó motu proprio; los Jueces que lo han de componer no son de nombramiento real, sino que se reservó el Papa hacerlo a presentación de los Reyes de España, como también se reservó las plazas de asesor, auditor del Nuncio, del Fiscal de la Nunciatura y la Rota, y la de Abreviador, recayendo en personas que sean del agrado y aceptación de su Majestad; y por ser nombrados por el Romano Pontífice, así como por el rango que ocupan en el orden jerárquico son inamovibles y no pueden reemplazarse por la potestad civil, y vacan sólo por muerte, ascenso, renuncia o deposición canónica, que no pueden efectuarse legalmente sin formación de causa y por sentencia que merezca ejecución.

Al final de la comunicación el vicergerente hace resaltar la importancia de que los miembros del tribunal de la Rota sigan desempeñando sus cargos para que no sufra retraso la administración de la justicia y pide que se ponga en conocimiento de la Regencia Provisional del Reino estas consideraciones para que se digne reponer en sus cargos a los respectivos individuos³¹.

«Seguían entre tanto las Juntas revolucionarias de provincias, animadas por tan liberal ejemplo, encarcelando y desterrando obispos. Así lo hizo la de Cáceres, al paso que las de Granada, La Coruña, Málaga y Ciudad Real se propasaban a dejar cesantes a deanes, dignidades, canónigos y curas de sus respectivas catedrales o colegiadas, sustituyéndolos con otros de su mayor confianza»³². Cumpliendo con

31. Comunicación enviada por el Vicergerente de la Nunciatura Apostólica, D. José Ramírez de Arellano al Excmo. Sr. Secretario del Despacho de Estado, el 5 de noviembre de 1840. CASTILLO Y AYENSA, José del, *ob. cit.*, II, 216, 217.

32. MENÉNDEZ Y PELAYO, Marcelino, *ob. cit.*, II, 985.

los deberes que le imponía la vicegerencia, José Ramírez de Arellano —que comenzó a despachar interinamente los asuntos ordinarios de la nunciatura en 1835 tras la ruptura total de relaciones entre Madrid y la Santa Sede por decisión expresa del gobierno Pontificio³³— no pudo abstenerse de reclamar contra los destierros, confinamientos y deposiciones que se habían permitido varias Juntas, y elevó varios escritos al Ministerio de Estado. También reclamó «contra un decreto del 14 de noviembre de 1840 por el que fueron establecidas en Madrid 24 parroquias sin contar con la autoridad eclesiástica, y contra un decreto por el que imponía a la diócesis de Málaga, donde había vicario capitular legítimo, un gobernador eclesiástico en la persona de Valentín Ortigosa»³⁴.

En tal estado de violencia y cisma, la Regencia Provisional, lejos de apagar el fuego, le echó nueva leña, apoyando, so pretexto de fuerza, a un D. Valentín Ortigosa, clérigo de prava doctrina que anticanónicamente se había intrusado en el gobierno eclesiástico de la diócesis de Málaga, con todo y tener ésta vicario capitular legítimamente electo y haber incurrido el Ortigosa en grave sospecha de herejía»³⁵.

La Regencia Provisional, no obstante hallarse encausado este señor, mandó que se encargase del gobierno eclesiástico de la diócesis de Málaga, lo que movió al vicegerente a elaborar otra comunicación quejándose de dicho nombramiento, manifestando que «no puede surtir otro efecto canónico que turbar las conciencias de aquellos fieles, hacer nulos todos sus actos y causar males espirituales en aquel territorio»³⁶.

Después de las reiteradas protestas de José Ramírez de Arellano «nuevas tropelías de la Regencia que hizo pasar sus exposiciones al tribunal Supremo de Justicia. Respondieron los Fiscales López y Alonso con las más vulgares doctrinas del siglo XVIII, y, conformándose a ellas, propuso el tribunal extrañar de estos reinos al vicegerente de la nunciatura y ocuparle las temporalidades. Oyolo de buen grado la Regencia y por decreto de 29 de diciembre intimó el destierro a Arellano, cerró la Nunciatura, suprimió el tribunal de la Rota y facultó al tribunal Supremo para conceder todo género de gracias eclesiásticas. En el decreto se llamaba a Ortigosa obispo electo de Málaga»³⁷.

33. CÁRCCEL ORTÍ, Vicente, *ob. cit.*, 170, 171 y 283, 284.

34. *Ibidem*, pp. 838-384.

35. MENÉNDEZ Y PELAYO, Marcelino, *ob. cit.*, II, 985.

36. Comunicación enviada por el Vicegerente de la Nunciatura Apostólica, D. José Ramírez de Arellano al Excmo. Sr. Primer Secretario de Estado y del Despacho, el 20 de noviembre de 1840. CASTILLO Y AYENSA, José del, *ob. cit.*, II, 219.

37. MENÉNDEZ Y PELAYO, Marcelino, *ob. cit.*, II, 985-986.

Las disposiciones contenidas en el mencionado decreto se efectuaron rápidamente y con ruido. Se hicieron toda clase de actos de ostentación para extrañar a José Ramírez de Arellano. Nos relata los pormenores Jaime Balmes:

«Después que hemos visto tanta humillación ante las exigencias y desmanes de la Gran Bretaña, tantas vergonzosas transacciones con los motines, tanta impotencia, tanta indecisión y timidez a la vista de graves peligros, es curioso recordar la firmeza y valentía de que se hacía gala para un indefenso eclesiástico. Sin demora debía nombrarse un Jefe que se hiciese cargo y respondiera de la persona del señor de Ramírez de Arellano, y que con la fuerza de un subalterno y veinte caballos del ejército le condujese a la frontera, y en el entretanto que se preparaba para emprender la marcha del jefe nombrado por el Capitán General, debía quedar encargado de la custodia del Señor Ramírez de Arellano el sargento mayor de la plaza, quien debía hacer la entrega del mismo al citado jefe. La orden es comunicada el 31 de diciembre, y el señor de Arellano salía de Madrid a las seis de la mañana del día 1.º de enero»³⁸.

Tras la salida, se cerró en pocos días el Tribunal de la Nunciatura. El Gobierno de Madrid a pesar de los actos realizados trató de convencer al gobierno Pontificio de la justicia de éstos y de la conveniencia de reanudar las interrumpidas negociaciones, manteniendo además, en Roma, el encargado de la Agencia de preces Julián Villalba.

b) *El Romano Pontífice declara la injusticia e ilegalidad de los actos del Gobierno de Madrid mediante la alocución de 1 de marzo de 1841*

Ante estos hechos, el Papa, Gregorio XVI, no quedó tranquilo y se vio obligado a intervenir de nuevo en el Consistorio de 1.º de marzo de 1841 para exponer al mundo católico la conducta del gobierno español y declarar la injusticia e ilegalidad de sus actos.

Gregorio XVI se lamenta del mal estado de la religión en España así como de los daños que estaba ocasionando el gobierno de Madrid. Enumera los decretos promulgados en España que atentan contra el derecho de la Iglesia por el orden que sigue:

1. El decreto de 10 de diciembre de 1840 en que se reserva lo mandado desde 1835 para prohibir que los Obispos promuevan a nadie a las Sagradas Ordenes.

38. BALMES, Jaime, *Obras completas* (Barcelona 1927), VIII, p. 121.

2. Los de 6 y 13 de diciembre de 1840, por los que se hacen extensivas las disposiciones sobre conventos aplicadas a las que existían en las provincias ocupadas antes por D. Carlos.

3. El de 9 de diciembre de 1840 que mandaba vender las Iglesias de los conventos, que no se habían reservado expresamente para la celebración de los Divinos Oficios.

4. El decreto de 21 de enero de 1841, por el que se anunciaba el restablecimiento del artículo 2.º de la ley de 16 de junio de 1840 o también llamada Ley reparadora, que mantenía a las Iglesias y al Clero secular en la posesión y goce de sus bienes y establecía para su dotación el 4 % de todos los frutos de la tierra.

5. El decreto de 30 de noviembre de 1840, por el cual se prohibía la vuelta a España de todos los prelados y demás eclesiásticos expulsados, habiendo sido todos ellos desterrados porque defendían la causa de la Iglesia contra los atentados del Gobierno.

6. Reclamaba por último contra el proceder de la Regencia en el negocio de la Nunciatura y el extrañamiento de José Ramírez de Arellano. También son censurados por el Santo Padre los actos del gobierno relativos al presbítero Ortigosa, y después de declarar nulos todos estos actos del gobierno español, trata con misericordia a los autores de los mismos y les ruega que abran los ojos para conocer los males que innecesariamente habían causado, y les recuerda las censuras en que habían incurrido conforme al tenor de los concilios generales³⁹.

Esta alocución, en su esencia, fue la que encendió la cólera del gobierno de Madrid. Nos narra Balmes los acontecimientos de esos momentos:

«Publicada la alocución de Su Santidad, preciso es confesar que el gobierno había recibido una herida profunda, pues que no sólo se había perdido toda esperanza de que durante su administración se restableciesen las relaciones amistosas con la Corte de Roma, sí que también las desavenencias habían llegado a un punto de tal gravedad y acritud, que era muy temible no viniésemos a parar a un escandaloso rompimiento. Este era el primer resultado de la conducta ilegal, injusta e impolítica del gobierno presidido por Espartero: La Nación, que tenía derecho a exigir de quien la había revuelto para apoderarse del mando que al menos la gobernase conforme a sus verdaderos in-

39. Alocución de Gregorio XVI de 1 de marzo de 1841. Archivo del MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. POLÍTICA SANTA SEDE (1835-1842), Legajo 2656, n.º 19.

tereses, veía con dolor que se la llevaba a un cisma religioso, exponiéndola a una discordia intestina que podía encender de nuevo la guerra civil»⁴⁰.

Al día siguiente de la celebración del consistorio envió Julián Villalba a Madrid ejemplares impresos de la alocución del Papa y en su despacho rogaba a la Regencia que caminase con pulso en este asunto, que iba preñado de un cisma.

La alocución de Gregorio XVI irritó extraordinariamente a la Regencia, y produjo la exposición que el 28 de junio de 1841 presentó el ministro de Gracia y Justicia, José Alonso, al Duque de la Victoria, ya Regente del Reino, junto con el decreto de igual fecha, y el manifiesto contra la alocución de Su Santidad publicado el 30 de julio de 1981.

«En este Manifiesto, compilación monstruosa de errores canónicos, y de inexactitudes históricas, se falsificó enteramente la historia del negocio de Roma: por fortuna el autor, demasiado imprudente, descubrió la pasión que la cegaba, y con asegurar que las maniobras del Santo Padre iban dirigidas a producir un Cisma, quitó el mismo crédito a sus palabras, e hizo patente su demencia. Prohibióse la Alocución del Papa, y se mandaron recoger a mano Real todos los ejemplares de ella, impresos o manuscritos; medida injusta por todos conceptos donde había libertad de imprimir. ¿Y para qué recogerla cuando se impugnaba? Así revelaron los impugnadores que no podían refutarla con argumentos sólidos; así manifestaron temerla aún después de refutada. No eran vanos sus celos; el Manifiesto del Ministro de Gracia y Justicia dió más realce y más popularidad a la Alocución del Sumo Pontífice»⁴¹.

Aquí puede decirse que acabaron por este año, 1841, las negociaciones con Roma, reduciéndose casi toda la correspondencia de Julián Villalba a comunicar lo que allí ocurría y la del gobierno a encargarle que le tuviese siempre al corriente de todo.

«Sin volver a hacer gestión alguna en Roma, empleó el Gobierno lo que restaba del año 41 en prepararse para dar al Papa una formidable embestida en el año siguiente. Como retirado a cuarteles de invierno después de su primera y desgraciada campaña, meditó el plan para la segunda, y acumuló todas sus fuerzas y recursos para combatir de nuevo el Vaticano. Nada le quedó por hacer dentro de España contra las cosas y personas eclesiásticas: se renovaron todos los malos decretos, se dieron otros más contrarios aún a la disciplina

40. BALMES, Jaime, *ob. cit.*, VIII, 122.

41. CASTILLO Y AYENSA, José del, *ob. cit.*, I, 329.

de la Iglesia, se derogaron las leyes reparadoras, y se restablecieron las del año de 37, completándose la tarea de aquel malhadado año con la expulsión de muchos y notables eclesiásticos»⁴².

CAPÍTULO II

EL PROYECTO DE LEY DE ALONSO (20 de enero de 1842)

EL PROYECTO DE LEY DE ALONSO

«Abriase el año de 1842 con el acto más escandaloso que pudo excogitarse en el ciego frenesí de la impiedad contra la Santa Sede, y lo ejecutaba un Gobierno que se hallaba al frente de la nación más católica del mundo. Este acto era la declaración imprudente de un espantoso cisma, con que se amenazaba al Jefe Supremo de la Iglesia, si no se entregaba atado de pies y manos al capricho de nuestros gobernantes. Seducidos éstos todavía por la equivocada idea de intimidar a Roma, y creyendo tal vez que su fatal sistema hallaría algún apoyo en el religioso pueblo que tan mal conocían, y tan mal representaban, osaron llevar a las Cortes, recientemente abiertas, aquel famoso proyecto, que leído en la sesión del 20 de enero por el Ministro de Gracia y Justicia, sirvió sólo afortunadamente para dar a conocer a sus autores, y para pasar a la historia el desgraciado nombre de quien lo había autorizado»⁴³.

1. *Autor y fecha de presentación del proyecto de Ley al Congreso de Diputados*

«Abrióse al fin la campaña del año de 42 presentando el Ministro de Gracia y Justicia a las Cortes en 20 de enero aquel famoso Proyecto de Ley que lleva en la historia el nombre de su autor»⁴⁴.

El 20 de enero de 1842, D. José Alonso, Ministro de Gracia y Justicia, ocupando la tribuna del Congreso de los Diputados leyó el Proyecto de Ley prohibiendo toda correspondencia con la Curia Romana⁴⁵.

42. *Ibidem*, I, 329-330.

43. CASTILLO Y AYENSA, José del, *ob. cit.*, I, 279.

44. CASTILLO Y AYENSA, José del, *ob. cit.*, I, 330.

45. Diario de las Sesiones de Cortes, Congreso de Diputados. Legislatura 1841-1842, LX, 336.

2. Denominación del Proyecto de Ley

En el apéndice sexto del Diario de las Sesiones de Cortes aparece el Proyecto objeto de nuestro estudio y dice: «Proyecto de Ley relativo a prohibir toda clase de correspondencia con la Curia romana»⁴⁶. Pero no siempre se le denominaba de este modo.

El mismo autor, lo denominaba Proyecto de Ley sobre reservas apostólicas. Esto ocurrió cuando fue requerido a presentarse ante la comisión encargada de examinarlo y remitió un oficio comunicando a los Secretarios del Congreso de Diputados que «el lunes próximo 18 del corriente a las once de la mañana me personaré en la sala de conferencias de ese Palacio a fin de satisfacer los deseos que tiene de conferenciar conmigo la comisión encargada de examinar el Proyecto de ley sobre reservas apostólicas»⁴⁷.

3. El Proyecto de Ley a través del Congreso de Diputados

a) Se constituye la comisión encargada de examinarlo

El 24 de enero, 4 días más tarde de su presentación, se dio cuenta en el Congreso de que las secciones habían hecho los nombramientos de las comisiones para los proyectos de ley recién presentados. Para el Proyecto de Ley que estamos examinando, se formó la comisión integrada por los Sres. Gómez Acebo, Ferro Montaos, Mata Olózaga, Collantes (D. Antonio), Posada Herrera y, por último, el Sr. Llamas⁴⁸; y 3 días más tarde se dio cuenta de los nombramientos de presidentes y secretarios de comisiones, «y de la que había de dar dictamen sobre el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno relativo a prohibir toda relación con la corte de Roma» se nombró presidente al Sr. Olózaga y secretario al Sr. Posada Herrera⁴⁹.

El 4 de febrero de 1842, D. Antonio Collantes, diputado del Congreso que formaba parte de la comisión para el examen del Proyecto de ley, tomando la palabra dijo entre otras cosas delante del Congreso:

«Por consiguiente, lejos de tener yo miras hostiles, ni personali-

46. *Ibidem*, 361 y ss.

47. Oficio que envía D. José Alonso comunicando que comparecerá en la Sala de Conferencias del Congreso de los Diputados para conferenciar con la comisión encargada de examinar su Proyecto de ley. ARCHIVO DEL CONGRESO DE DIPUTADOS, Legajo 60, n.º 29.

48. DIARIO DE LAS SESIONES DE CORTES. CONGRESO DE DIPUTADOS. Legislatura 1841-1842, LX, 460.

49. *Ibidem*, 551.

dades contra el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, le puedo asegurar que cuando se discuta el Proyecto de Ley relativo al restablecimiento de la antigua disciplina, puede contar desde ahora con mi pobre voto y con mi apoyo eficaz tanto como él valga»⁵⁰.

b) *Exposición del Obispo del Tuy ante el Congreso de Diputados*

El 10 de marzo de 1842 el Obispo de Tuy hace varias observaciones para que se tuviesen presentes en la discusión del Proyecto de ley presentado por el Gobierno el 20 de enero pasado⁵¹.

El 16 de marzo se mandó pasar a la comisión la exposición del Obispo de Tuy⁵².

c) *Comunicación a José Alonso para que se presente en el Congreso de Diputados*

El 14 de abril, el secretario de la comisión, Sr. Posada envió un oficio al Ministro de Gracia y Justicia comunicándole que:

«La comisión encargada de examinar el Proyecto de Ley relativo a que cese toda clase de correspondencia con la Curia romana desea conferenciar con V.E.»⁵³.

El 16 de abril D. José Alonso remite un oficio a los Sres. Secretarios del Congreso de Diputados comunicándoles que:

«Para el lunes próximo 18 del corriente a los once de la mañana me personaré en la Sala de Conferencias de ese Palacio a fin de satisfacer los deseos que tiene de conferenciar conmigo, la comisión encargada de examinar el Proyecto de Ley sobre reservas apostólicas»⁵⁴.

d) *Esperando el dictamen de la comisión*

La comisión seguía examinando el Proyecto de Ley pero no podía dar un dictamen ya que la gravedad del asunto lo retrasaba. Además

50. *Ibidem*, 720.

51. Exposición del Obispo de Tuy al Congreso de Diputados haciendo varias observaciones para que se tuviesen presentes en la discusión del Proyecto de ley relativo a que cesase toda clase de correspondencia con la Curia romana, presentado por el Gobierno el 20 de enero de 1842. ARCHIVO DEL CONGRESO DE DIPUTADOS. Legajo 60, n.º 29.

52. DIARIO DE LAS SESIONES DE LAS CORTES. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Legislatura 1841-1842, LXII, 1810.

53. ARCHIVO DEL CONGRESO DE DIPUTADOS. Legajo 60, n.º 29.

54. *Ibidem*.

el Gobierno esperaba una reacción de la Santa Sede, y mientras, tenía que esperar.

El 29 de marzo un diputado, el Sr. Garrido, pidió la palabra para hacer una excitación a la comisión que examinaba el Proyecto. No era su ánimo acusarla por no haber dado el dictamen pero se quejaba de que había transcurrido ya bastante tiempo y quería «evitar que la prensa de cierto color haga cargos al Congreso porque no se ha tratado ya de este negocio»⁵⁵.

El 18 de abril se recibe en el Congreso una petición de Constanza Pérez, vecina de la villa del Ferrol pidiendo que el Congreso se dignase dar su aprobación al Proyecto de ley de D. José Alonso. Esta exposición concluye de la siguiente forma:

«Suplica a los padres de la Patria que otorguen la sanción que se desea al virtual proyecto de decreto leído en el Congreso nacional por el Ministro de Gracia y Justicia en sesión de 20 de enero del corriente año sobre anulación de las reservas de la Corte Romana, sí lo menos en la parte que concierne a la dispensación para contraer matrimonio»⁵⁶.

El 30 de abril, mandóse pasar a la comisión que entendía en el asunto esta exposición de Constanza Pérez⁵⁷.

e) *Crisis de Gobierno*

Desde esta fecha no aparece ninguna referencia del Proyecto en el Diario de Sesiones. Hemos buscado en los Archivos del Congreso de Diputados y en el Archivo de Presidencia de Gobierno, pero todo ha sido inútil. La comisión no daba un dictamen; pronto llegaría la crisis del Gobierno González, y cesarían todos los ministros. Fue quizá ésta la causa de que no prosperase el Proyecto de ley. D. José Alonso renunció de su cargo en el mes de junio y D. Antonio de Zumalacárregui le sustituyó el 17 de junio⁵⁸, pero no estaba dispuesto a seguir la línea de su antecesor. Mirando la prensa de aquellos meses hemos encontrado algunos datos de interés.

El Corresponsal, un diario de la tarde, el 27 de mayo de 1842, recoge en su primera página lo que sigue:

55. DIARIO DE LAS SESIONES DE LAS CORTES. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Legislatura 1841-1842, LXII, 2021.

56. Exposición de Constanza Pérez, vecina del Ferrol, pidiendo que el Congreso se digne dar su aprobación al Proyecto de ley presentado por el Gobierno el 20 de enero de 1842. ARCHIVO DEL CONGRESO DE DIPUTADOS. Legajo 60, n.º 29.

57. DIARIO DE LAS SESIONES DE CORTES. CONGRESO DE DIPUTADOS. Legislatura 1841-1842, LXIII, 2822.

58. *Ibidem*, LXIV, 3575.

«Lamentable es por cierto la situación del país. Esa sombra de gobierno que existe va a desaparecer, y a nuestro juicio no va a ser posible combinar un ministerio»⁵⁹.

Y unos renglones más abajo sigue:

«Un solo cambio creíamos posible, y era el de la cartera de Gracia y Justicia. El Señor Alonso con sus proyectos irreligiosos, con sus ataques intempestivos a las conciencias, con sus ideas rancias ya y sin crédito en materias eclesiásticas, había logrado perder generalmente las simpatías»⁶⁰.

El 17 de junio recoge en su primera página:

«Al fin ha terminado la crisis; pero de un modo por desgracia que ha hecho recordar a la generalidad el adagio español traducido de aquella fábula de Esopo 'Parturient montes'»⁶¹.

f) *Formación del nuevo Gobierno*

El 17 de junio se resuelve la crisis ministerial y el General Rodil es nombrado por el Regente presidente del nuevo gobierno. Todos los españoles esperaban el 20 de junio la presentación del programa del nuevo gobierno. Se hallaban sometidos a la decisión de las Cortes proyectos de ley de grave importancia, y entre éstos:

«Yace además dormido en una comisión del Congreso una delicadísima cuestión que nadie más que el señor Alonso ha tenido la imprudencia de levantar: la de nuestras relaciones con el centro de la comunidad católica; ley de resentimiento y de despiques, ley de circunstancias y no de previsión; y por consiguiente ley desprovista de aquella impasible majestad que debe estar impresa en todas las resoluciones que tienen por objeto el crear una situación permanente ¿Qué hará el nuevo ministerio con este proyecto? ¿Lo retira o lo sostiene? Si no da hoy mismo sus explicaciones, continuará el desasosiego de las conciencias, mal gravísimo aunque oculto que algún día puede dar una violenta erupción»⁶².

4. *Estructura del Proyecto de Ley de Alonso*

Se compone el Proyecto de Ley de un largo preámbulo y de un texto legal⁶³.

59. *El Corresponsal*. Diario madrileño de la tarde, n.º 1.090, 1.

60. *Ibidem*, n.º 1.090, 1.

61. *Ibidem*, n.º 1.111, 1.

62. *Ibidem*, n.º 1.114, 1.

63. Proyecto de ley presentado por el Ministro de Gracia y Justicia relativo a pro-

El texto legal consta de 14 artículos que son como un resumen o síntesis del preámbulo.

Hemos querido recoger un breve comentario de José Castillo y Ayensa que resume en pocas palabras la composición del proyecto:

«El largo preámbulo del proyecto mezcla informe de falsedades históricas, de errores canónicos, de mezquindad, de jactancia, y aún de encubierto miedo, parece más bien obra de algún eclesiástico apóstata que de un ministro secular: los catorce artículos del proyecto vienen a ser como un extracto del preámbulo»⁶⁴.

5. *Estudio del Proyecto de Ley de Alonso*

Vamos a realizar un estudio de los 14 artículos que componen el Proyecto de Ley de Alonso. Para la elaboración de este epígrafe hemos acudido a los trabajos que realizaron hombres ilustres de la historia, del derecho y de la religión.

Combatieron el Proyecto de Ley, Jaime Balmes con un extenso artículo publicado en *La Sociedad*, Pedro J. Pidal en la *Gaceta de Madrid*, Marcelino Menéndez Pelayo en la *Historia de los Heterodoxos españoles*, José María Cuadrado, canonista y redactor de prensa en el diario *El Católico*, y el Obispo de Tuy en su exposición de 10 de marzo de 1842 ante el Congreso de Dipuados.

Art. 1.º: «La Nación española no reconoce y en su consecuencia resiste las reservas que se han artibuido a la silla apostólica con mengua de la potestad de los Obispos, bajo cuyo título se ha tenido y tiene hostilmente desatendida la Iglesia de España en sus más importantes necesidades.»

El primer artículo es consecuencia directa de todos los errores que en el preámbulo del Proyecto se recogen. Se podía haber escrito brevemente diciendo: La Nación española no reconoce las reservas apostólicas.

El derecho de reservas es tan esencial al primado de jurisdicción del Romano Pontífice, que sin él no se podría conservar la unidad del episcopado, y se destruiría la dependencia y subordinación de los obispos al Jefe Supremo de la Iglesia.

Desde el momento en que cada uno de los obispos pudiese ejercer en su diócesis respectiva todo el contenido de la potestad de jurisdicción sin reconocer una autoridad superior que pueda limitársela, y

hibir toda clase de correspondencia con la Curia romana. DIARIO DE LAS SESIONES DE LAS CORTES. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Legislatura 1841-1842, LX, 361.

64: CASTILLO Y AYENSA, José del, *ob. cit.*, I, 279.

corregir y castigar los abusos en el ejercicio de ella, desaparece toda idea de dependencia y subordinación al Vicario de Cristo, y a éste se le priva el derecho y se le exime de la obligación de apacentar el rebaño que el mismo Cristo le impuso a través de S. Pedro.

¿Cómo podría el Papa ejercer el gravísimo encargo que le confió Jesucristo de apacentar, regir y gobernar la Iglesia universal si los pastores no le estuviesen subordinados en el uso y ejercicio de su jurisdicción?

El Romano Pontífice ostenta el primado de jurisdicción y a través de él suple los defectos de los otros pastores, corrige sus excesos y les limita la autoridad respecto de ciertas causas, personas y lugares, cuando lo exija la necesidad o utilidad de la Iglesia.

Si un obispo puede restringir y coartar las facultades de sus párrocos y ministros cuando lo juzga necesario, aún más lo podrá hacer el Papa respecto a los obispos.

El Concilio de Trento en la sesión 14, capítulo 7.º de Penitencia, se expresa en estos términos:

«Con razón pues los Sumos Pontífices han podido reservar a su particular juicio, en fuerza del Supremo poder que se les ha concedido en la Iglesia universal, algunas causas sobre los delitos más graves.»

De esta doctrina resulta por una consecuencia necesaria, que los obispos están sujetos al Papa en el ejercicio de su jurisdicción. Otra cosa sería un atentado contra la potestad esencial del primado, dado por Jesucristo a S. Pedro y a sus sucesores. El Obispo que traspasa los límites señalados por el Papa es cismático, y los actos que ejerce fuera de ellos son nulos y sin efecto, sin que potestad civil alguna pueda subsanarlos.

José María Cuadrado al comentar el artículo 1.º, escribe:

«Pero baste de exposición y herejías, y vamos al Proyecto, como deducción de la exposición aquella, debemos desde luego decir que *pulchra matre, pulchrior filius*: efectivamente, el primer artículo es un exabrupto digno de todos los errores que en la exposición preceden «La Nación española no reconoce... ¡las reservas!»

Si una provincia, una ciudad, una aldea, un español dijese: no reconozco, y en consecuencia resisto las órdenes del señor Alonso ¿cómo llamaría al que así obrase? Rebelde sin duda. Rebelión es la resistencia a la legítima autoridad, y el Sr. Alonso en lo civil es el órgano autoridad, y el Sr. Alonso en lo civil es el órgano del Regente y de S. M. la Reina. Pues esta rebelión en lo religioso se llama cisma; con que el primer artículo es eminentemente cismático»⁶⁵.

65. *El Católico*, n.º 783, 169.

Art. 2.º: «Se prohíbe toda correspondencia que se dirija a obtener de la Curia Romana gracias, indultos, dispensas y concesiones eclesiásticas de cualquiera clase que sean, y los contraventores serán irremisiblemente castigados con las penas señaladas en la ley primera, título 13, libro 1.º de la Novísima Recopilación.»

Art. 3.º: «Los breves, rescriptos, bulas y cualesquiera otras letras o despachos de la Curia Romana, que sin haber sido solicitados directamente desde España vinieren a personas residentes en este reino, no sólo no podrá ser cumplidas, ejecutadas, ni usadas, pero ni aún retenidas en poder de las personas a quienes viniesen, por más tiempo que el de 24 horas, que se señalan de término para entregarlas a la autoridad superior política, a fin de que las remita al Gobierno. Toda infracción a lo dispuesto en este artículo será asimismo castigada con las penas establecidas en el anterior.»

Por el artículo 2.º se prohíbe toda correspondencia que se dirija a obtener de la Curia Romana gracias, indultos, dispensas y concesiones eclesiásticas de cualquiera clase que sean. Ninguna potestad humana tiene derecho para interceptar entre la cabeza y los miembros de la Iglesia universal la correspondencia necesaria para enseñar, para juzgar, para mandar, etc. Esta correspondencia es un derecho fundamental e inseparable de la constitución de la Iglesia.

Además de que en esta prohibición absoluta se incluye indudablemente el recurso a la silla apostólica para obtener facultad de ser absuelto de pecados reservados a la Santa Sede, y siendo por una parte cierto de que hay muchos pecados y censuras cuya absolución está reservada al Papa, los que se hallen en la necesidad de tener que acudir a Roma en solicitud de esta gracia se encuentran sin remedio para salir de tan triste estado.

También podemos decir que los artículos 2.º y 3.º son consecuencia del 1.º; apéndices o hechos que consuman el cisma o la rebelión contra la suprema autoridad de la Iglesia, y nada añaden al fondo de la cuestión sino un tinte de despotismo.

Es muy curioso que un gobierno denominado liberal, prohíba, con penas severas, el que sus gobernados acudan y se entiendan con el que su creencia les dice que es la suprema autoridad de su religión.

Si en el primer artículo se proclama la rebelión considerada universalmente, se desenvuelve luego y se presenta en toda su claridad en los artículos siguientes.

La prohibición de toda correspondencia que se dirija a obtener de la Curia Romana gracias, indultos, dispensas y concesiones eclesiásticas de cualesquiera clase que sean, que recoge el artículo 2.º, es el modo más eficaz de romper las relaciones entre los católicos es-

pañoles y el Romano Pontífice. Rotas las relaciones y las comunicaciones se llega al cisma.

Art. 4.º: «Se prohíbe acudir a Roma en solicitud de dispensas de impedimentos, y no se dará curso a ninguna solicitud de esta clase».

Art. 5.º: «Por ahora y mientras que en el código civil se hace la debida distinción entre el contrato y el sacramento del matrimonio, se regularizan los impedimentos y determina la autoridad que ha de dispensarlos y el modo: Los M. RR. arzobispos y RR. obispos de España usarán por sí o sus vicarios de las facultades que les competen para dispensar, siguiendo la conducta de este punto observada por prelados predecesores suyos, y arreglándose en ello a lo ordenado en el Concilio de Trento que dispone que rara vez y siempre gratuitamente se dispense».

Los artículos 4.º y 5.º se refieren a impedimentos de matrimonio. El primero (el 4.º) prohíbe acudir a Roma por la dispensa de ellos y entra en la misma categoría que los 2.º y 3.º. El artículo 5.º amenaza con regularizar tales impedimentos y crear la autoridad que ha de dispensarlos.

Art. 6.º: «Por ningún título ni bajo ningún concepto volverá a enviarse de España ni por cuenta de España, dinero alguno a Roma directa ni indirectamente con destino a aquella corte y su curia por motivos religiosos, bajo la pena de perder con otro tanto lo que se envíe, si fuere aprehendido, o de pagar una multa del doble de lo enviado, y de sufrir además el castigo que corresponda con arreglo a la citada ley primera, título 13, libro 1.º de la Novísima Recopilación.»

Se prohíbe bajo graves penas enviar de España o por cuenta de España dinero alguno a Roma directamente o indirectamente con destino a aquella corte o su curia por motivos religiosos.

El mundo católico debe proveer a la Santa Sede los gastos que ésta realice en los despachos de los negocios eclesiásticos, y los salarios de los que trabajan en su servicio, y esto, es tan justo y necesario como el que una nación contribuya a sostener las cargas de su gobierno y de sus funcionarios.

En la exposición que realiza el Obispo de Tuy ante el Congreso de Diputados, comentando el Proyecto de ley del Sr. Alonso, al llegar a la lectura del artículo 6.º dice:

«No es nuevo el declamar con motivo del mucho dinero que se dice enviarse a Roma de todos los países católicos, pero si los que de buena o mala fe declaman, tuviesen un conocimiento exacto de las sumas que con diferentes motivos religiosos entran en Roma y de las que allí salen por iguales causas, cesarían acaso en sus declamacio-

nes, que por demasiado repetidas y gastadas han perdido toda su fuerza. El célebre y docto Macheti da una cuenta exacta del dinero que entra en Roma y sale de allí por causas eclesiásticas, y por un cálculo de hecho reunidas todas las sumas, demuestra que si son cerca de trescientos mil escudos los que de las Iglesias de todo el mundo católico van a Roma, son quinientos mil los que de Roma se expenden, para las Iglesias de todo el orbe, en la Propaganda, colegios extranjeros, montes de piedad, peregrinos, etc., es decir, cerca de doscientos mil más de los que recibe. Debiendo además tenerse presente que Roma es la capital del mundo católico y debe atender a todo él»⁶⁶.

Art. 7.º: «En ningún tiempo se admitirá en España nuncio o legado de S. S. con facultades para conceder dispensas ni gracias, aunque sean gratuitas: las facultades que se les concedieren a este fin serán retenidas cuando presentaren sus bulas al pase.»

Se prohíbe mediante este artículo que el nuncio o legado del Papa ejerza las facultades para conceder dispensas y gracias.

Nos podremos preguntar, ¿y quién concederá éstas? ¿Y con qué facultades? ¿Y quién ha otorgado estas facultades? La conclusión a que llegamos no es nueva. El Sr. Alonso es un innovador, que quiere plantear una Iglesia nueva en España, opuesta a la que fundó Jesucristo.

Art. 8.º: «La nación no consiente la reserva introducida de confirmar en Roma y expedir bulas a los prelados presentados para las Iglesias de España y sus dominios; debiéndose arreglar este punto a lo dispuesto en el Cánón 6 del Concilio 12 de Toledo, y a la más pura disciplina de la Iglesia de España.»

Antes de nada conviene decir que la confirmación de los Obispos por el Romano Pontífice no es una reserva, sino un derecho divino anejo al primado apostólico. Se nos habla del Cánón 6 del Concilio 12 de Toledo, pero aquella disciplina no es otra cosa que concesiones hechas en virtud de las circunstancias, salvando siempre el principio.

Por eso el Concilio de Trento en vez de declarar usurpada la autoridad del Papa en la confirmación de los Obispos, declara por el contrario, que son legítimos y verdaderos los creados por él, lo que no sucedería si los confirmara con una potestad intrusa o ilegal. El Cánón 8.º del Concilio de Trento en la sesión 23 declara:

«Si quis dixerit, Episcopos qui auctoritate Romani Pontificis assumuntur, non esse legitimos, et veros Episcopos... anathema sit.»

66. Exposición del Obispo de Tuy al Congreso de Diputados. ARCHIVO DEL CONGRESO DE DIPUTADOS. Legajo 60, n.º 29.

Por lo demás por respetable y antiguo que sea el Concilio 12 de Toledo sus cánones no puede ni deben regir, cuando la Iglesia los ha derogado, así como tampoco rigen en el gobierno de una sociedad civil las antiguas leyes cuando se establecen otras nuevas que los abrogan. La Iglesia tuvo justas causas para ordenar la disciplina antigua; las ha tenido también para mudarla y reformarla.

José María Cuadrado, que ejerció de redactor en el periódico *El Católico*, al comentar el artículo que estamos analizando dice:

«con sólo este artículo del proyecto tendríamos una Iglesia como la anglicana, aislada y nula; un obispado como el ruso, de creación alonsina o imperial, sin misión, sin carácter, sin autoridad; una religión como la china, mudable *ad beneplacitum mandarinorum*»⁶⁷.

Art. 9.º: «El eclesiástico presentado para alguna de dichas Iglesias que intentare su confirmación en Roma, o la expedición de bulas, tanto para esto, cuanto los metropolitanos para obtener el palio, y los que las obtuvieron subrecticiamente, serán extrañados del reino y sus temporalidades ocupadas.»

Art. 10.º: «Las mismas penas expresadas en el artículo anterior serán aplicadas a los prelados que se negaren al cumplimiento de lo dispuesto en esta ley.»

José María Cuadrado al comentar estos dos artículos dice:

«Y sino ahí están los artículos 9.º y 10.º donde se conmina a los que quieran ser católicos con el destierro y el despojo. Estos artículos suponen que habrá hombres venales que venderán a Dios y a Cristo como Judas por mantenerse en su puesto. Pues bien, mañana cuando el Sr. Alonso esté en la tumba viene otro mandón que quiere que los tales obispos en vez del Evangelio lean el Coram, ¿se resistirán a hacerlo? Por respeto a Dios, no, según hemos dicho antes, por respeto al Sr. Alonso menos, porque ya estará podrido, con que por respeto asimismos hasta se circuncidirán si se lo mandan. Y, una Iglesia montada sobre estas posibilidades ¿sería la obra de Dios? Vá, será la obra de... un hombre y nada más. Y sí algo más, será la obra del error, la herejía con todo su despotismo y el cisma con todos sus ribetes de tiranía, de persecución y de odio frenético a la virtud y a la verdad. No porque el Sr. Ministro quiera todas estas consecuencias, ya hemos dicho que prescindimos de las intenciones, sino porque ellas se irían deduciendo y poniendo en práctica no bien el cisma fuese legal»⁶⁸.

67. *El Católico*, n.º 783, 170.

68. *Ibidem*, 170 y 171.

Art. 11.º: «Respetando en el Sumo Pontífice la calidad de centro de unidad de la Iglesia, tendrán curso todas las comunicaciones que terminen a puntos de esta naturaleza; pero deberán dirigirse todas por conducto del gobierno, el cual las examinará para calificar las que sean de esta clase; las que no pertenecieren a ellas, serán retenidas.»

Es este artículo un poco extraño y es difícil comprender lo que quiere decir. En el Proyecto de ley se le priva al Romano Pontífice de casi toda la jurisdicción que ejerce en España y ahora se dice que se respeta al Papa en calidad de centro de unidad de la Iglesia.

Sabemos que el catolicismo no consiste sólo en la uniformidad de creencia y unión con Roma, sino también en la subordinación y obediencia al Romano Pontífice que desde la sede donde se encuentra por disposición divina rige toda la Iglesia.

Si se rompe el lazo de la obediencia al Papa, al poco tiempo se rompería también el de la Fe. La experiencia ha probado constantemente que al cisma se ha seguido la alteración de la creencia.

José María Cuadrado al comentar este artículo n.º 11 se expresa así:

«Se respeta la calidad de centro y se rompe los lazos todos que unen a él. ¿Está usted en eso? Del eje, del centro de una rueda, dependen los rayos; en el centro de la unidad del mundo se apoyan todos los graves, y ¡siendo el Papa el centro de la unidad eclesiástica, se prohíbe a los eclesiásticos que se apoyen en él, y se conmina a los obispos que son los rayos de esta unidad con las mayores penas si dependen de él...!!! ¡Oh lógica! ¡Oh saber!...»⁶⁹.

Art. 12.º: «Quedan suprimidas las agencias de preces a Roma, establecidas en aquella Corte y en la de Madrid.»

Art. 13.º: «Se derogan todas las leyes, renuncia la nación todas las concesiones hechas a su favor por la silla apostólica, y no consiente las reservas contrarias a lo que en esta ley se establece y determina.»

Art. 14.º: «Se expedirán las oportunas circulares a los muy RR. arzobispos y RR. obispos del Reino para que cumplan con lo dispuesto en esta ley, y cooperen con la mayor eficacia a que se conserve la tranquilidad de las conciencias entre sus respectivos diocesanos, y les hagan conocer la justicia y necesidad con que las Cortes y el gobierno han tenido que tomar estas disposiciones.»

Con el artículo 14 se concluye el Proyecto de ley presentado por el ministro de Gracia y Justicia a las Cortes el 20 de enero de 1842.

69. *Ibidem*, 172.

En este último artículo se persuade a los Arzobispos y Obispos para que cumplan con lo dispuesto en esta ley y cooperen con eficacia a que se conserve la tranquilidad de las conciencias entre sus respectivos diocesanos. ¿Cómo va a ser posible esto si se desconoce la autoridad del Romano Pontífice, el vicario de Jesucristo en la tierra?

Concluamos pues diciendo que el Romano Pontífice por un derecho inherente a su primado de jurisdicción en toda la Iglesia tiene la facultad de reservar a su inmediata autoridad el conocimiento de causas y asuntos que por su gravedad u otras circunstancias crea conveniente avocarse en virtud de la autoridad que recibió del Hijo de Dios en la persona de San Pedro, de quien es sucesor, para regir y gobernar la Iglesia universal.

Pudo pues el Papa en uso de este derecho y jurisdicción reservar a la suya la facultad de dispensar en los impedimentos dirimentes del matrimonio, con tanta más razón cuanto que habiendo sido establecidos o por los concilios generales o por los Sumos Pontífices, sólo éstos pueden dispensarlos, porque sólo ellos lo pueden hacer de las leyes generales de la Iglesia. Los teólogos y canonistas convienen en atribuir al Romano Pontífice solamente la facultad de dispensarlos.

Con igual derecho se reservó la confirmación o institución canónica de los obispos que aunque ejercida en los primreos siglos de la Iglesia por los Patriarcas y metropolitanos competentemente autorizados por la silla apostólica, después, por causas y razones muy poderosas obligaron a los Sumos Pontífices a reasumir exclusivamente un derecho que comunicándolo a otros, no por eso lo habían enajenado, volviendo de este modo al original de donde había dimanado, sin que lo dispuesto en el cánón 6.º del Concilio 12 de Toledo pueda privar de ese derecho esencial al primado del Vicario de Cristo, puesto que los metropolitanos que a él concurrieron no hicieron otra cosa que delegar las facultades que por la disciplina entonces vigente tenían de confirmar a los Obispos de sus respectivas provincias.

Nada más justo que el que los estados católicos concurren a soportar los gastos que se ocasionan en Roma con motivo de los asuntos eclesiásticos que a ellos mismos interesan, y no sería razonable que el Papa los costeara con el producto de las rentas de los estados romanos de los cuales era soberano temporal.

La correspondencia de los miembros de la Iglesia con su cabeza en asuntos y negocios eclesiásticos es de derecho divino, así como el derecho que tiene el Papa de gobernar, regir y enseñar a todos los fieles, y la obligación de éstos de oír, acatar y obedecer la voz del Pastor y jefe supremo de la Iglesia.

CONCLUSIONES

Podemos afirmar después de haber estudiado el Proyecto de ley de Alonso que sus disposiciones no son conformes a la doctrina que profesa la Iglesia católica, y que puesto en práctica hubiera conducido necesariamente a un cisma.

En el preámbulo que antecede al referido proyecto, se establecen las doctrinas en que está basada la ley. Se hallan recopiladas todas las razones que en diferentes tiempos y por autores también diversos se han alegado para negar al Romano Pontífice la autoridad que tiene en toda la Iglesia sobre lo que comunmente se llama «reservas apostólicas»: dispensa de impedimentos del matrimonio, expedición de bulas de confirmación de obispos, absolución de ciertos pecados o censuras, etc.

Al analizar el Proyecto de ley partimos del dogma de fe que expresa que el Romano Pontífice es el sucesor de Pedro, residiendo en su persona la potestad que Jesucristo concedió al primero de los apóstoles, y en este sentido es vicario de Cristo en la tierra, cabeza de la Iglesia Universal y Padre común de todos los cristianos; y a quien en la persona de Pedro se le concedió un pleno poder para regir y gobernar la Iglesia: en este poder se fundamenta y se apoya el derecho que ejerce el Romano Pontífice sobre las reservas.

A través del estudio de la doctrina y de la opinión pública manifestada en la prensa de 1842, hemos podido comprobar la reacción tan firme que se llevó a cabo para combatir el Proyecto de ley de Alonso.

José Alonso fue nombrado ministro de Gracia y Justicia el 21 de mayo de 1841 y enseguida comenzó a llevar a la práctica sus exaltadas ideas que vacías de sentido común fueron duramente criticadas. Por lo que refleja su expediente personal, que se conserva en el Ministerio de Justicia, conocemos que era un hombre trabajador, hasta tal punto que estuvo aquejado de enfermedades nerviosas que le afectaban especialmente a la cabeza debiendo ausentarse por largas temporadas de su trabajo de bufete y de toda tarea intelectual por prescripción médica.

Se recoge también en su expediente el informe que la Audiencia de Aragón realizó en 1824 sobre la conducta de José Alonso durante los años de 1820 y 1823 y se manifiesta que era contrario a la Constitución vigente, enemigo del gobierno legítimo de Fernando VII, y que concurría al Café de la Fontana de Oro en Madrid, lugar en el que

se reunían políticos que profesaban las ideas liberales más exaltadas y progresistas⁷⁰.

Influido además por la doctrina regalista de Campomanes no sólo se contentó con publicar los 4 tomos sobre «Las alegaciones fiscales del Excmo. Sr. Conde de Campomanes» sino que trató de llevar las ideas allí contenidas, a la práctica, a través del Proyecto de ley que hemos examinado⁷¹.

Por eso, conociendo estos datos, podemos concluir que fue tan demasiado lejos en su Proyecto, que aún a sus amigos les pareció temerario y duro en los términos.

La opinión pública tuvo mucha fuerza. No apoyó la política que llevó a cabo el gobierno ni los actos realizados por el ministro de Gracia y Justicia: los ministros pidieron la dimisión en junio de 1842 y el Proyecto de Ley de Alonso, no prosperó.

Por último, no puede menos de llamar la atención, a la vista del modo como la opinión pública reaccionó al conocer el texto de la ley, el profundo divorcio entre los gobernantes y el pueblo, entre la España oficial —léase gobierno o facción detentadora del poder— y la España real. Al parecer los ayacuchos, los progresistas de Espartero, ni se preocuparon de averiguar lo que el pueblo pensaba o quería. Más que el bien común, mostraron buscar el triunfo del modelo laico de sociedad.

FUENTES Y BIBLIOGRAFIA

FUENTES

1. ARCHIVO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES.

1.1. *Archivo de la Embajada de España cerca de la Santa Sede.*

Legajo 712: *Reales Ordenes*. Contiene el nombramiento de Julián Villalba como nuevo encargado de la Agencia de Preces en Roma.

Legajo 713: *Reales Ordenes*. Contiene las instrucciones que el gobierno de Madrid remite a Julián Villalba durante 1840 y 1841.

Legajo 715: *Reales Ordenes*. Contiene toda la correspondencia que recibió Villalba del Ministerio de Estado después de la presentación del Proyecto de ley de Alonso a las Cortes (20 de enero de 1842).

Legajo 771: *Oficios de la Embajada*.

70. Expediente personal de D. José Alonso, Ministro de Gracia y Justicia. ARCHIVO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. Legajo 567, n.º 47.

71. Colección de las alegaciones fiscales del Excmo. Sr. Conde de Campomanes, publicada por D. José Alonso (Madrid 1841), Tomos I, II, III y IV. BIBLIOTECA DEL ARCHIVO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES.

- 1.2. *Ministerio de Estado: Política Santa Sede (1835-1842).*
Legajo 2656: Carpeta n.º 19, sobre arreglo de diferencias entre el gobierno pontificio y el de Isabel II. Contiene los despachos que Julián Villalba envió a Madrid durante 1842 y 1843; y los informes de la Mesa del Ministerio de Estado para tener en cuenta en las negociaciones con Roma.
- 1.3. *Expediente personal de Julián Villalba.*
Legajo 241: Expediente n.º 13.974.
- 1.4. *Expediente personal de José Narciso Aparici.*
Legajo 3: Expediente n.º 47.
- 1.5. *Colección de las Alegaciones Fiscales del Conde de Campomanes*, publicadas por José Alonso en 4 volúmenes. (Madrid 1841).
2. ARCHIVO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
 - 2.1. *Expediente personal de José Alonso.*
Legajo 567, Expediente n.º 47.
 - 2.2. *Archivo de la Comisión de Codificación.*
Trabajo en elaboración por Juan Francisco Lasso Gaité. *El Ministerio de Justicia: su imagen histórica.*
3. ARCHIVO DE LAS CORTES.
 - 3.1. *Archivo del Congreso de Diputados.*
Legajo 60, n.º 29: Proyecto de ley del Gobierno relativa a que cese toda clase de correspondencia con la Curia Romana. Contiene aquello que hace referencia al Proyecto de ley de Alonso.
Legajo 60, n.º 1: Expediente sobre proposición de ley prohibiendo extracción de dinero a Roma.
 - 3.2. *Biblioteca del Congreso de Diputados.*
Diario de las Sesiones de las Cortes. Hemos consultado las legislaturas de 1839, 1840, 1841, 1842 y 1843.
4. OTROS ARCHIVOS CONSULTADOS.
 - 4.1. *Archivo de la Presidencia de Gobierno.* Fuimos a consultar las discusiones públicas y privadas del Proyecto de ley de Alonso. Curiosamente faltan la de los años 1841 y 1843.
 - 4.2. *Archivo de la Academia de la Historia.*
 - 4.3. *Archivo de la Biblioteca Nacional.*
 - 4.4. *Archivo Histórico Nacional.*

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA

- ANGELÓN, Manuel, *Historia de Isabel II* (Barcelona 1860).
- ARTOLA, Miguel, *Memorias de tiempos de Fernando VII*, B.A.C. (Madrid 1947).
— *Partidos y programas políticos (1808-1936)*, Ed. Aguilar, (Madrid 1974).
- BALMES, Jaime, *Obras completas*, B.A.C. (Barcelona 1927).
- BÉCKER, Jerónimo *Relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede durante el siglo XIV* (Madrid 1908).
— *Historia de las relaciones exteriores de España durante el siglo XIX* (Madrid 1924-1926), 3 volúmenes.
- CÁRCER ORTÍ, Vicente, *Política eclesial de los Gobiernos liberales españoles (1830-1840)* (Pamplona 1975).
- CASTILLO Y AYENSA, José del, *Historia crítica de las negociaciones con Roma desde la muerte del Rey D. Fernando VII* (Madrid 1859), 2 volúmenes.

- CUENCA TORIBIO, José Manuel, *La Iglesia Española ante la Revolución Liberal*. Ed. Rialp (Madrid 1971).
- ESPARTERO, Baldomero, *Exposición a la Reina Gobernadora sobre los sucesos de Sevilla por el Capitán General D. Baldomero Espartero* (Madrid 1838).
- FUENTE, Vicente de la, *Historia de España* (Madrid 1873-1875), 6 volúmenes.
- GARRIDO, F., *Espartero y la Revolución* (Madrid 1854).
- HARTZENBUSCH, Eugenio, *Apuntes para un catálogo de periódicos madrileños desde el año 1661 al 1870* (Madrid 1894).
- LAFUENTE, Modesto, *Historia General de España desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII por Modesto Lafuente continuada desde dicha época hasta nuestros días por Juan Valera en colaboración de Andrés Borrego y Antonio Piralá* (Madrid 1890).
- LONGARES ALONSO, Jesús, *Prensa Liberal. Española* (1833-1843).
- MARLIANI, M., *La Regencia de Espartero* (Madrid 1845).
- MENÉNDEZ Y PELAYO, Marcelino, *Historia de los heterodoxos españoles*, Ed. B.A.C. (Madrid), 2 volúmenes.
- MIRAFLORES, Marqués de, *Memorias para la historia del Reinado de Isabel II* (Madrid 1843), 2 volúmenes.
— *Impugnación de la obra publicada por D. José Castillo y Ayensa con el título «Historia crítica de las negociaciones con Roma desde la muerte del Rey D. Fernando VII»* (Madrid 1859).
- NIDO Y SEGALERVA, Juan del, *Antología de las Cortes desde 1840 a 1846* (Madrid 1910).
— *Historia política y parlamentaria de Baldomero Fernández Espartero* (Madrid 1916).
- PÉREZ ALHAMA, Juan, *La Iglesia y el Estado español*, Instituto de Estudios Políticos (Madrid 1967).
- PIRALA, Antonio, *Historia de la Guerra civil y de los partidos liberal y carlista* (Madrid 1868-70).
- POU MARTÍ, J. M., *Archivo de la Embajada de España cerca de la Santa Sede. Índice analítico IV de documentos de la primera mitad del siglo XIX* (Madrid 1935).
- REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel, *Política religiosa de los liberales en el siglo XIX* (Madrid 1973).
— *La Exclaustración* (1833-1840), Ed. B.A.C. (Madrid 1976).
- ROMERO BLANCO, Beatriz, *José del Castillo y Ayensa, humanista y diplomático* (1795-1861). Ed. Eunsá, Pamplona.
- SEGUNDO FLÓREZ, José, *Espartero: Historia de su vida militar y política*. (Madrid 1843-1845), 4 volúmenes.
- SUÁREZ VERDEGUER, Federico, *Génesis del Concordato de 1851*, Ius Canonicum, III, 1963.
- VILLALBA HERVAS, Miguel, *Dos regencias* (Madrid 1897).

PERIODICOS Y REVISTAS CONSULTADOS

Eco del Comercio
El Castellano
El Católico
El Conservador
El Correo Nacional

El Corresponsal
El Espectador
El Globo de Cádiz
El Liberal Barcelonés
La Cruz
La Gaceta de Madrid
La Hoja Republicana de Sevilla
La Sociedad
La Voz de la Religión.